



**GLOBAL
INITIATIVE**

AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

PARO NACIONAL EN COLOMBIA

Cuando la movilización
social alimenta los intereses
criminales

Felipe Botero

JULIO 2021

AGRADECIMIENTOS

Gracias a Daniela Benedetti, quien proporcionó la motivación para escribir este informe. Agradecer también a Juan Camilo Cock, Jhon Freddy Bustos y los otros miembros de Nueva Ola, quienes ayudaron al autor a comprender y a ampliar su perspectiva frente a la situación. Gracias también a Mariana Mora, Ian Tennant, Siria Gastélum Félix, Guillermo Vázquez del Mercado y Mark Shaw por sus útiles revisiones y valiosos comentarios. Finalmente, gracias a los beneficiarios del Fondo de Resiliencia, quienes compartieron sus vivencias e impresiones durante el paro nacional.

SOBRE EL AUTOR

Felipe Botero es el coordinador para Colombia de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, GI-TOC) donde implementa estrategias para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente al crimen organizado y amplía la presencia de GI-TOC en el país y la región. Tiene experiencia académica y profesional en construcción de paz; desarme, desmovilización y reintegración; derechos humanos, y seguridad ciudadana. Anteriormente, fue Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz de Cali, Colombia. Sirvió como coordinador regional para la implementación del programa de Jornada Única en el Ministerio de Educación y fue asesor del Viceministerio del Interior en materia de derechos humanos. Trabajó en la Agencia Colombiana de Reintegración, monitoreando la implementación de la política pública para la reintegración de excombatientes.

© 2021 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en ninguna forma o a través de ningún medio sin el permiso expreso y por escrito de GI-TOC.

Fotografía de portada: © Antonio Cascio/SOPA Images/LightRocket por medio de Getty Images

Diseño: Catherine Coetzer

Para información adicional dirigirse a:
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Avenue de France 23
Geneva, CH-1202
Switzerland

www.globalinitiative.net

CONTENIDO

Resumen	i
Cali: Una historia de participación ciudadana y violencia	1
El camino hacia el paro.....	4
La movilización masiva de 2019	4
El impacto del COVID-19	5
De la protesta a la crisis económica	5
La relación entre protesta y criminalidad	10
La criminalización de la protesta	10
Criminalidad dentro de la protesta	13
El control criminal de los bloqueos	16
La historia se repite	19
Recomendaciones	19
Referencias	23

RESUMEN

Tras más de un año de malestar social en Colombia, la convocatoria del paro nacional el 28 de abril de 2021 llevó a estallidos de violencia entre manifestantes, cuerpos policiales y actores criminales. Esto surgió como consecuencia de décadas de agitación social, política y económica en el país provocada por altos niveles de desempleo, desigualdad e inseguridad en las principales ciudades de Colombia. Esta situación se vio agravada con la llegada del COVID-19 en 2020 y el consecuente confinamiento obligatorio, así como por noticias de corrupción gubernamental, razones que llevaron a los ciudadanos a tomar las calles en 2021. Desde que comenzó el paro, el conflicto violento ha dado lugar a un estimado de 74 muertes,¹ 111 casos de

personas desaparecidas y numerosos informes de abuso y brutalidad policial, provocando llamadas por parte de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional a respetar los derechos humanos de los manifestantes. Hasta la fecha, la mayoría de los análisis del paro se han centrado en las medidas tomadas por el Gobierno para responder al estallido social. Sin embargo, poco se ha explorado el papel del crimen organizado en la movilización social y la consecuente crisis económica.

El uso de bloqueos por parte de manifestantes, particularmente en la región suroccidente del país, creó varias oportunidades para que grupos del crimen

organizado, la delincuencia común y ciudadanos oportunistas usaran las manifestaciones como pretexto para actividades delictivas. Mientras tanto, la paralización de las vías de transporte ha creado escasez de alimentos, medicinas y combustible, lo que ha provocado un colapso económico. A medida que continúa el paro nacional, el Gobierno colombiano y sus fuerzas armadas necesitan una mejor comprensión de la relación entre movilización social y los actores criminales para frenar el crimen y la violencia y restaurar la economía.

Este informe presenta un análisis de los hechos ocurridos en la ciudad de Cali, centro económico de la región suroccidente y epicentro del paro y los bloqueos. El estudio de caso de Cali muestra que

hay tres puntos clave entre el crimen y la protesta derivados del paro nacional: la criminalización de la protesta social, la criminalidad dentro del paro y los intereses de los actores criminales en prolongar los bloqueos y el paro. Partiendo de esta relación entre el crimen y el malestar social, las autoridades deben tomar acciones correctivas para asegurar que las futuras protestas sociales no sean consideradas delictivas por naturaleza y que los actores criminales no se aprovechen de las movilizaciones sociales. Para ello, se plantean cinco recomendaciones: acción humanitaria inmediata para encontrar a las personas desaparecidas, reforma policial integral, fortalecimiento de la aplicación de la ley, diálogo entre actores alrededor de la protesta social y respuestas gubernamentales a las exigencias ciudadanas.

Claves

- El 28 de abril de 2021 se inició una huelga nacional en Colombia, convocada en rechazo a un proyecto de ley de reforma fiscal y alimentada por el malestar social producto del desempleo, la desigualdad y las divisiones de clases.
- La ciudad de Cali emergió como el epicentro de violencia y crimen relacionados con el paro, debido en gran parte a la posición estratégica de la ciudad en el país y su historia de violencia. A lo largo del paro, se manifestaron tres puntos clave entre crimen y protesta.
- Primero, la movilización masiva generó una respuesta contundente y militarizada contra los manifestantes por parte de la Policía de Colombia. Esto llevó a la criminalización de la acción de protesta, ya fuera pacífica o violenta.
- En segundo lugar, la actividad delictiva surgió cuando los grupos del crimen organizado, la delincuencia común y los ciudadanos oportunistas se aprovecharon del caos y la falta de aplicación de la ley generadas por los bloqueos.
- En tercer lugar, el uso de bloqueos por parte de los manifestantes como método de manifestación interrumpió el flujo de vehículos, personas y bienes que entraban y salían de la ciudad. Esto creó oportunidades para que los grupos del crimen organizado consolidaran su poder en determinadas zonas y participaran de actividades ilícitas.
- Para reducir la violencia, restaurar la estabilidad y garantizar la seguridad ciudadana en el futuro, las autoridades deben tener una mejor comprensión del papel del crimen organizado dentro de las protestas sociales.
- Para asegurar una respuesta más eficaz a la movilización masiva en el futuro, se necesita una reforma policial integral, el fortalecimiento de la aplicación de la ley y la creación de políticas multisectoriales para responder a los requerimientos de los ciudadanos.



CALI: UNA HISTORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VIOLENCIA

▲ Manifestaciones antigubernamentales toman las calles de Cali, epicentro de la criminalidad violenta desde el inicio del paro nacional de Colombia en abril del 2021. © Gabriel Aponte por medio de Getty Images

El surgimiento de Cali como epicentro de la violencia y la actividad criminal durante el paro nacional se debe en gran parte a la posición geográfica y económica estratégica de la ciudad y su historia de conflicto social. Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, con una población de 2,3 millones de personas. La ciudad conecta el centro de Colombia con Buenaventura, el principal puerto del país en la costa del Pacífico, y se ha convertido en el centro logístico para el envío de importaciones y exportaciones. Además, es referente de la industria de la caña de azúcar, la sede de múltiples corporaciones nacionales y multinacionales y el punto neural de un creciente sector de comercio y servicios. Esto ha convertido a Cali en un destino económico para los migrantes internos que buscan seguridad y oportunidades laborales. Como consecuencia, Cali es altamente multicultural, influenciada por diferentes olas migratorias de la costa del Pacífico colombiano, y cuenta con la segunda población afrodescendiente más grande de Latinoamérica, por detrás de Salvador de Bahía en Brasil.²

Cali también presenta una sociedad muy desigual. Desde la década de 1970, los conflictos armados entre el Estado y los grupos guerrilleros en las regiones rurales han provocado migraciones económicas y desplazamientos internos que han aumentado la presión social y económica sobre la ciudad.³ Una larga historia de fracaso gubernamental en la creación de instituciones fuertes y efectivas



Manifestantes se enfrentan con la Policía antidisturbios en el aniversario de la formación del escuadrón móvil antidisturbios de Colombia. © Guillermo Legaria por medio de Getty Images

ha engendrado una cultura de movilización cívica y activismo entre la ciudadanía de Cali, y el compromiso cívico siempre ha sido reconocido en la ciudad. Sin embargo, la incapacidad del Gobierno para brindar servicios básicos a todos los ciudadanos ha facilitado diferentes dinámicas de gobernanza criminal y ha creado un flujo constante de jóvenes dispuestos a participar en la delincuencia.

Con una tasa de homicidios de 47,6 por 100 000 habitantes, Cali dobla la tasa nacional y supera la tasa de otras ciudades como Bogotá y Medellín.⁴ Gran parte de esta violencia es el legado del conflicto armado interno y el narcotráfico de Colombia, representado principalmente por los conocidos Cartel de Cali y Cartel del Norte de Valle, que comenzaron a utilizar la posición estratégica de Cali para desarrollar sus actividades ilegales desde la década de 1980. Además de estos grandes carteles, la ciudad tiene una estructura criminal local de más de 180 bandas criminales que se benefician del expendio de drogas, la extorsión, el sicariato y el robo.⁵ A lo largo de las décadas, estos actores criminales han fomentado una cultura de violencia y se ha normalizado el uso de armas entre los habitantes de la ciudad.



GRÁFICO 1 Bloqueo de carreteras en Colombia durante el paro, 6 de mayo del 2021.

FUENTE: Adaptado de <https://lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/paro-nacional-2021-%C2%BFel-estado-contra-la-sociedad->



▲
El malestar social
en Colombia
llegó a un punto
crítico en 2019 y
actores criminales
explotaron la frágil
situación.

© Nicolo Filippo
Rosso/Bloomberg
por medio de Getty
Images

EL CAMINO HACIA EL PARO

La movilización masiva de 2019

Los fracasos políticos del Gobierno y los sucesivos escándalos de corrupción desde la década de 2010, sumados a la desigualdad económica local, provocaron el descontento ciudadano en Colombia durante 2019. Los ciudadanos estaban particularmente insatisfechos por los pocos avances que había hecho el Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Del Pueblo (FARC-EP), firmado en 2016. El 21 de noviembre de 2019, miles de personas salieron a las calles pacíficamente para expresar su desilusión con su Gobierno y frente a la situación del país, encendiendo la llama de la movilización social masiva.

Si bien las manifestaciones fueron pacíficas, al final del día ocurrieron diversas actividades delictivas como saqueos, vandalismo y peajes urbanos extorsivos en diferentes puntos de Cali y Bogotá. Posteriormente, cuando la Policía se desplegó para frenar estas acciones, estallaron enfrentamientos armados entre los ciudadanos y la Policía, como presagio del futuro paro nacional del 2021. El día terminó con la declaración de toque de queda por parte del Gobierno de Cali, en un intento de recuperar el control de la ciudad, aparentemente sitiada por la violencia criminal. Las redes sociales se inundaron de miles de mensajes advirtiendo sobre la intrusión de «vándalos» en la propiedad privada y promoviendo el uso de armas para la autodefensa. Luego se demostró que estos mensajes eran falsos.

La llegada de la temporada navideña y de la pandemia del COVID-19 a inicios del 2020 frenaron temporalmente las movilizaciones ciudadanas, pero de manera simultánea aumentó la presión socioeconómica sobre millones de ciudadanos.

El impacto del COVID-19

En una ciudad ya agobiada por la crisis económica y el crimen, las medidas de cuarentena y toque de queda implementadas por el Gobierno para prevenir la propagación del COVID-19 incrementaron la vulnerabilidad local. Como resultado de las medidas restrictivas, el 50 % de los restaurantes y bares de Cali cerraron definitivamente,⁶ la tasa de desempleo subió al 19,3 % y la ocupación o empleo informal se disparó al 49,1 %.⁷ Esta situación ha impactado de manera desproporcionada a los jóvenes, hasta el punto que, en Cali, uno de cada cinco hombres jóvenes y una de cada tres mujeres jóvenes ni trabaja ni estudia.⁸

Las medidas de cuarentena y toques de queda también afectaron en mayor medida a las poblaciones económicamente más vulnerables de la ciudad, incrementando la pobreza y la inseguridad alimentaria. La pobreza monetaria en Cali aumentó del 21,9 % en 2019 al 36,3 % en 2020,⁹ mientras que la cantidad de hogares que comen tres veces al día disminuyó del 95 % antes de la pandemia al 76 %.¹⁰ La percepción de pesimismo entre los ciudadanos también aumentó por encima del 75 % y la percepción de seguridad se desplomó por debajo del 20 %.¹¹

Los retos impuestos por la pandemia se vieron marcados por una serie de escándalos de corrupción. Si bien las investigaciones sobre presunta corrupción habían rodeado al Gobierno de Cali desde el inicio de su mandato en 2019, durante el 2020 se filtraron noticias sobre investigaciones formales a miembros del gabinete por el alto precio de las ayudas entregadas a personas vulnerables para aliviar el impacto del COVID-19, así como el gasto irregularizado de más de 4 millones de dólares para financiar una versión virtual de la tradicional Feria de Cali (el carnaval de la ciudad) en diciembre del 2020, cuando el país se acercaba a un segundo pico de contagios.

A medida que aumentaban los patrones de violencia, pobreza y desigualdad en Cali durante el 2020, se dio el escenario perfecto para que activistas organizados canalizaran la frustración social a través de la movilización masiva y para que los actores criminales se aprovecharan de la situación. La presentación ante el Congreso de la República, por parte del Gobierno, de un proyecto de reforma fiscal en abril de 2021 fue el detonante del paro nacional.

De la protesta a la crisis económica

A mediados de abril del 2021, tras un 2020 difícil en el que el producto interno bruto de Colombia cayó un 6,8%,¹² el Gobierno anunció un proyecto de reforma tributaria que pretendía ampliar la base de contribuyentes, al disminuir el umbral mínimo de los salarios gravables. En lugar de aumentar los impuestos a las grandes corporaciones, el plan se centró en la clase media y las pequeñas empresas. Como resultado, desde el 28 de abril de 2021, miles de personas – la gran mayoría jóvenes – tomaron las calles de las ciudades del país en un paro nacional indefinido. Las manifestaciones generalizadas obligaron al Gobierno a retirar su plan fiscal del Congreso, aceptar la renuncia tanto del ministro de Hacienda como del viceministro, y aceptar la negativa por parte del Congreso al proyecto de ley de reforma de salud.

Razones de la protesta de 2021

Reforma tributaria: El paro nacional fue convocado para oponerse a un proyecto de ley de reforma tributaria y fiscal presentado al Congreso por el Gobierno. La reforma se centró en cobrar impuestos a la clase media y las pequeñas empresas en lugar de a las grandes corporaciones o a productos que gozan de exenciones fiscales, como las bebidas azucaradas. Considerando la crisis económica del país, la mayoría de los colombianos rechazaron la reforma y se movilizaron en contra del proyecto.

Falta de gobernabilidad: El presidente Iván Duque ha sido criticado por no tener una agenda política clara, su falta de experiencia en la administración pública y su incapacidad para crear un consenso político en torno a temas clave para el país. Actores políticos y ciudadanos, según encuestas de percepción, desapruaban su gestión. Además, los ciudadanos perciben al presidente y al gabinete como alejados de los ciudadanos y de sus intereses. El descontento con los líderes nacionales se convirtió en una razón más para que la gente saliera a las calles.

COVID-19: La crisis social y económica que resultó del COVID-19 aumentó la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad de los grupos poblacionales históricamente excluidos, como los jóvenes y las comunidades étnicas. La desesperación y la falta de esperanza entre estos grupos los llevó a tomar las calles y «resistir», reclamando sus derechos a la educación y las oportunidades laborales.



GRÁFICO 2 Tuit del director ejecutivo (Américas) de Human Rights Watch.

FUENTE: <https://www.dw.com/en/colombia-deploys-military-in-cali-after-protests-leave-several-dead/a-57710343>



Mayo del 2021: Un supermercado en Cali con estantes casi vacíos debido a la escasez de alimentos causada por bloqueos de carreteras y puertos. © Gabriel Aponte por medio de Getty Images

Las victorias de los manifestantes tuvieron un alto precio. La violencia y los actos delictivos que rodearon las protestas provocaron más de 74 muertes (45 de las cuales involucraron a fuerzas policiales estatales),¹³ 111 personas desaparecidas y múltiples informes de brutalidad policial fueron reportados en los medios de comunicación locales e internacionales. Como respuesta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó y llevó a cabo una misión de verificación al país.

Además de la violencia y la brutalidad policial, el paro generó otra crisis que afectó directamente a Cali y la región del suroccidente de Colombia: el bloqueo al Departamento del Valle del Cauca. La principal estrategia de los manifestantes en el paro consistió en el bloqueo sostenido de carreteras regionales y locales, impidiendo el flujo de vehículos, personas y mercancías. Uno de los bloqueos más complejos tuvo lugar en Buenaventura, desconectando el principal puerto de Colombia con el centro y el norte del país, desencadenando una crisis de escasez de alimentos, medicinas y gasolina. La escasez de bienes y las dificultades para la movilidad generaron un colapso económico.

Las pocas empresas legales y formales que sobrevivieron al COVID-19, incluidas las grandes multinacionales y las industrias de caña de azúcar, se declararon en riesgo de quiebra. Durante más de un mes, las empresas no pudieron acceder a materia prima, a los empleados no se les permitió acudir a sus lugares de trabajo y los servicios de logística se detuvieron, generando la pérdida de miles de empleos formales e informales. Como resultado directo de los bloqueos, las crisis de inseguridad alimentaria y desempleo del país aumentaron y se retroalimentaron mutuamente.

En medio de este caos, no ha habido respuestas efectivas de los organismos gubernamentales a ningún nivel, todos los cuales enfrentan una caída histórica en popularidad. Los índices de aprobación actuales se ubican en 22 % para el alcalde de Cali y 18 % para el presidente del país, los porcentajes más bajos para ambos cargos en 20 años.

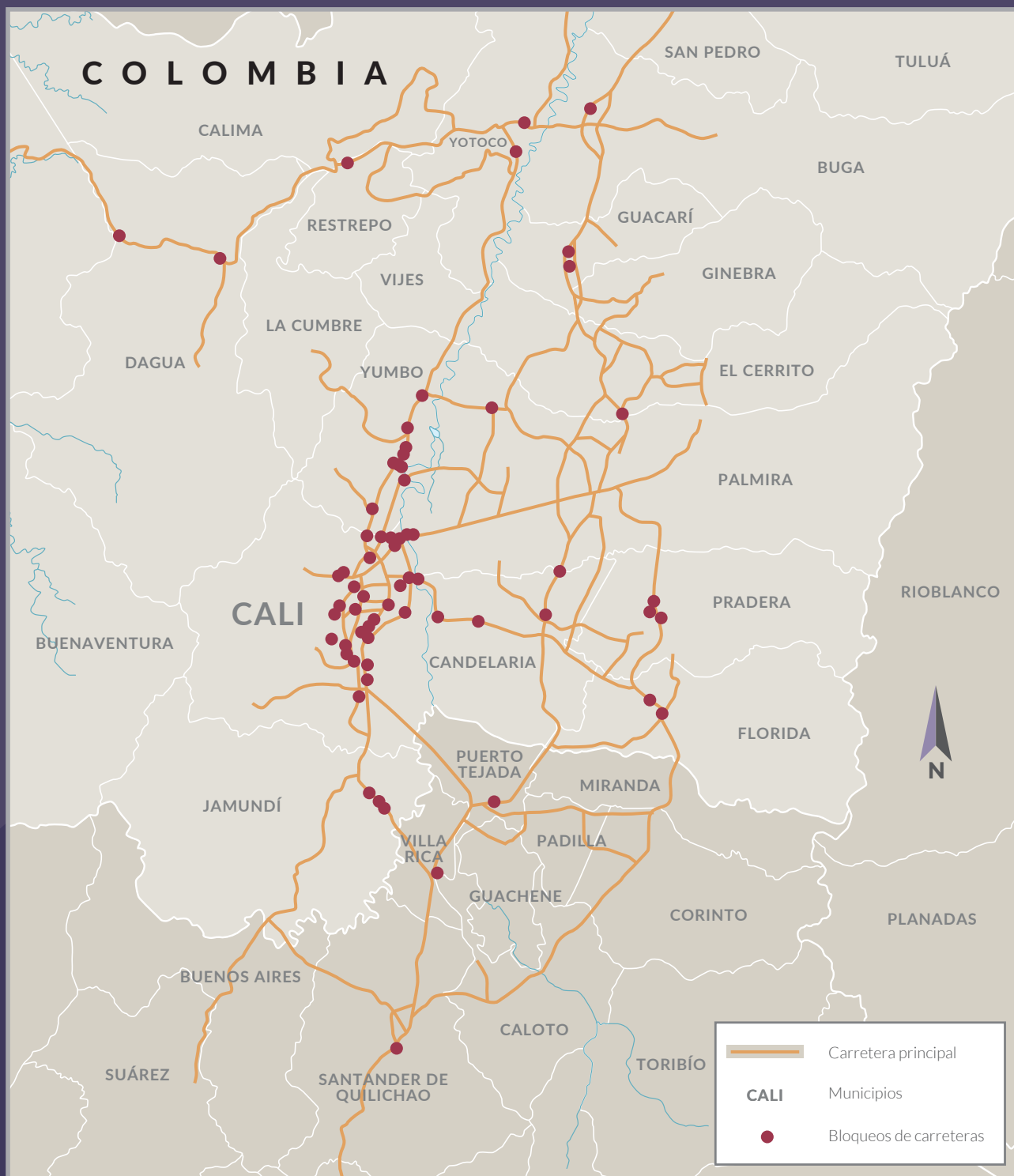
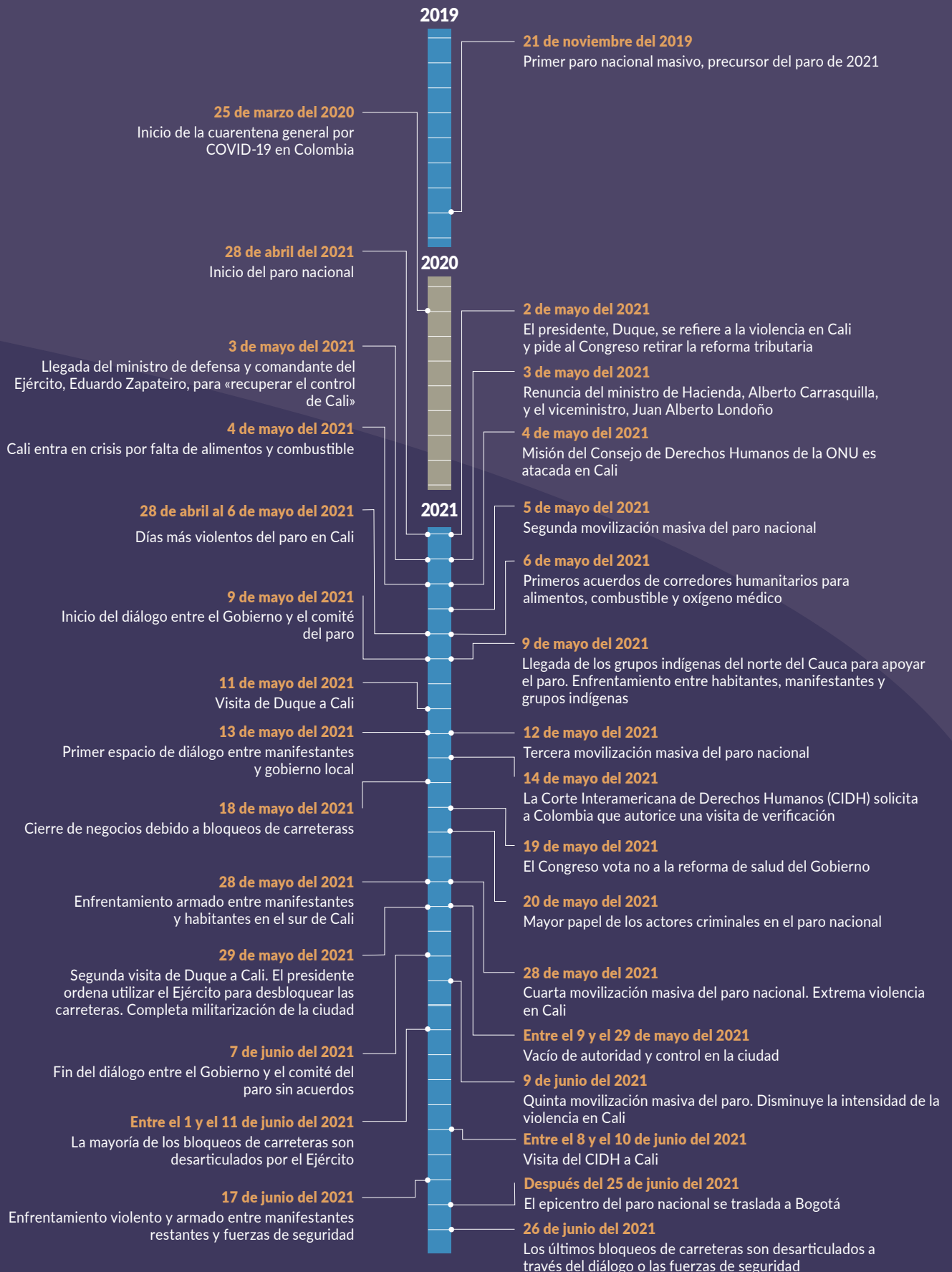


GRÁFICO 3 Bloqueos de carreteras en la región de Cali por manifestantes, 6 de mayo del 2021.

FUENTE: Adaptado de <https://lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/paro-nacional-2021-%C2%BFel-estado-contra-la-sociedad->

CRONOLOGÍA DEL PARO NACIONAL





LA RELACIÓN ENTRE PROTESTA Y CRIMINALIDAD

▲ Lo que comenzó como movilizaciones pacíficas contra el Gobierno brindó una oportunidad para los grupos criminales oportunistas. Aquí, un manifestante conmemora la muerte de un joven asesinado por la Policía colombiana en 2019.

© Antonio Cascio/SOPA Images /LightRocket por medio de Getty Images

Un análisis más detenido de los hechos que siguieron al 28 de abril en Cali destaca los nexos entre la protesta y el crimen en el paro nacional: la criminalización de la protesta, la criminalidad dentro de la huelga y el control de los bloqueos por parte de actores criminales. Estas intersecciones de manifestantes y delincuentes demuestran cómo la escalada del conflicto entre las autoridades y los ciudadanos creó un entorno que alentó la actividad delictiva de los grupos del crimen organizado, la delincuencia común y los ciudadanos oportunistas. También demuestran la necesidad de políticas y procedimientos más eficaces por parte del Gobierno para responder a los esfuerzos de movilización social.

La criminalización de la protesta

Emerge un ejército civil

En Cali, los hechos que rodearon al paro nacional siguieron el mismo patrón que la movilización de 2019. Una amplia movilización masiva y pacífica el primer día pronto fue seguida por saqueos de tiendas y ataques a bancos e infraestructura institucional. La unidad antidisturbios de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), fue desplegada y las autoridades locales declararon el toque de queda a partir de las ocho de la tarde, esperando que la mayoría de los manifestantes regresaran a sus hogares. Esto no sucedió; los manifestantes permanecieron en las calles y persistió la actividad delictiva. Sin embargo, la Policía

erróneamente se enfocó en los puntos de concentración de manifestantes en lugar de controlar los delitos. Esto creó una espiral violenta que se convirtió en la norma durante los siguientes seis días, el período más violento del paro.

Durante la primera semana de paro, los manifestantes permanecieron en las calles creando un ejército orgánico que pasó a denominarse «La Primera Línea», y declaró una guerra frontal contra el ESMAD. El «ejército» civil fue apoyado por habitantes locales que proporcionaron alimentos y primeros auxilios. Mientras tanto, la Policía colombiana utilizó la fuerza de manera indiscriminada contra manifestantes pacíficos. Algunos de los eventos se grabaron en vivo en redes sociales. Las reacciones de la Policía solo aumentaron la ira general que brotaba contra el Estado. En palabras de un manifestante:

[La Primera Línea] creó la barricada, y luego de cada ataque de la Policía, la extendieron, hasta llegar a los dos kilómetros del punto inicial. La idea era la defensa propia. Los [habitantes del lugar] vieron los ataques, los excesos de la Policía, la violencia en torno a todo esto, y decidieron apoyar la ampliación de las barricadas. [Los jóvenes] incluso discutieron y crearon acuerdos con los [habitantes locales]. Por otro lado, el papel de los [pobladores locales] fue clave, ellos proveyeron a la barricada de alimentos y medicinas, y en los momentos más duros de la escasez, [los jóvenes] continuaron distribuyendo alimentos, legitimándose con sus vecinos.¹⁴

Miembros de La Primera Línea, un «ejército» civil para enfrentar a la Policía, que se formó poco después de que comenzara el paro nacional. © Guillermo Legaria por medio de Getty Images



Durante el paro, los actores criminales aprovecharon la movilización masiva.

Una Policía militarizada reacciona ante un «enemigo interno»

La reacción de la Policía estuvo en consonancia con interacciones previas entre civiles y la Policía de Colombia. Tras 60 años de conflicto armado interno en el país, la Policía ha tratado la protesta social y la movilización ciudadana como una amenaza subversiva. Esta actitud se pudo evidenciar en los mensajes públicos del ministro de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación, que responsabilizaban a los disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado revolucionario de izquierda, de los hechos criminales de la protesta:

Colombia enfrenta una amenaza particular de las organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos. No son los manifestantes pacíficos, no son los ciudadanos que no han marchado y están en sus casas. Son estos vándalos, que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y del ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones, con propósitos particulares.¹⁵

Aunque no se puede descuidar el papel de las organizaciones criminales dentro del paro, el ministro de Defensa, Diego Molano, hizo esta declaración apenas cinco días después del inicio del paro sin aportar pruebas. Este tipo de afirmaciones demuestran la falta de comprensión del Gobierno sobre la crisis social, así como su deseo de identificar un enemigo interno al que responsabilizar.

La lógica de un enemigo interno se ve impulsada además por la fusión del poder militar y policial en Colombia. Aunque el servicio de Policía nacional es técnicamente una fuerza civil, la institución está adscrita al Ministerio de Defensa. En otras palabras, la Policía sigue la doctrina militar mientras está dirigida legalmente por autoridades civiles locales y regionales. La actuación policial militarizada se manifestó durante los primeros tres días del paro nacional en Cali, cuando el comandante jefe del ejército nacional Eduardo Zapateiro se trasladó personalmente a Cali para liderar los operativos policiales y brindar apoyo táctico mediante el despliegue de fuerzas militares en las calles de la ciudad. Zapateiro prometió retomar el control de la ciudad en tres días, pasando por encima de las autoridades civiles, como el alcalde de Cali y del jefe de Policía de la ciudad, quien renunció días después. Su promesa no se cumplió. La intervención militar incrementó el enfrentamiento, aumentó los niveles de violencia y afectó negativamente la opinión pública hacia la Policía, que utilizó fuerza indiscriminada contra los manifestantes.

La protesta como actividad delictiva

Siguiendo la lógica del enemigo interno, otra táctica de las autoridades fue retratar la huelga como una actividad puramente criminal, poniendo mayor énfasis en los hechos delictivos ocurridos durante las movilizaciones que en los factores socioeconómicos que llevaron a la ciudadanía a protestar en primer lugar. En particular, las autoridades cívicas y policiales respondieron enérgicamente contra los daños a la infraestructura, pero hablaron menos sobre la violencia y las denuncias de brutalidad policial. Mientras tanto, los manifestantes preguntaban por qué las fuerzas policiales y militares de la ciudad no estaban impidiendo los ataques a la infraestructura y la destrucción

de bienes públicos, sino que tenían como objetivo detener las manifestaciones pacíficas.

La dura respuesta de las autoridades en los primeros días del paro dejó a la ciudad inmersa en un conflicto entre quienes apoyaban el statu quo y las fuerzas armadas y quienes apoyaban el paro nacional. Esta partición se radicalizó por las divisiones de clases sociales y la desigualdad de ingresos, y fue avivada por la disponibilidad de armas en la ciudad.

Criminalidad dentro de la protesta

Interferencia de grupos de crimen organizado

La segunda manera en que se manifestó el crimen durante el paro fue al interior del mismo, puesto que actores criminales explotaron la movilización masiva para el logro de sus fines. En Cali, las continuas manifestaciones y la construcción de barricadas lograron promover y prolongar el paro en el tiempo, llamando la atención de diferentes actores que buscaban capitalizar la protesta. Entre esos actores, empezaron a aparecer actores criminales, facilitando la logística, ofreciendo dinero y brindando asesoría operativa para sostener los bloqueos. Estos actores incluían miembros de milicias altamente organizadas y subversivas como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, así como miembros de bandas criminales locales. En la mayoría de los casos, los manifestantes que originalmente tomaron las calles no reconocieron a estos actores criminales como representantes de su movimiento.

Los puntos de bloqueo y de concentración se caracterizaron por ser experimentos de participación cívica de los manifestantes, en una plataforma para la interacción social, el diálogo y la realización de actividades culturales y deportivas. Después de la instalación de barricadas por parte de los manifestantes, bandas criminales organizadas locales apoyaron a la Primera Línea para brindar seguridad, especialmente cuando los enfrentamientos contra el ESMAD se tornaban violentos, obteniendo el apoyo de la comunidad local. «Se han portado bien durante estos días [de huelga]», dijo un vecino en un área de bloqueo al oeste de la ciudad. Sin embargo, el movimiento fue pronto infiltrado por actores más radicales. Grupos de milicias subversivas comenzaron a unirse a la Primera Línea en un intento de radicalizar las posiciones del grupo y brindar apoyo operativo. Como explicó un activista local: «Cuando apareció la primera arma, estaba claro que eso no estaba bien. El Clan del Golfo y los disidentes hicieron ofertas para armar a la juventud, la Primera Línea inicialmente rechazó esas ofertas, pero se ha permitido cada vez más y cada vez hay más armas disponibles».¹⁶

En consecuencia, los esfuerzos criminales para sostener la confrontación violenta ocurrieron de manera simultánea con experimentos de participación ciudadana al interior de los puntos de concentración.



Cali, 12 de mayo: motociclistas hacen fila para llenar sus vehículos mientras los bloqueos provocan escasez de combustible. © Gabriel Aponte por medio de Getty Images

Saqueo por grupos del crimen organizado y oportunistas

Los efectos de los bloqueos también alimentaron distintos intereses criminales. A medida que avanzaba el paro, los puntos de concentración de los manifestantes y los bloqueos se alargaron, interrumpiendo por completo la movilidad de la ciudad. Tras una semana de paro, Cali comenzó a experimentar una grave escasez de alimentos, medicinas y combustible, lo que atrajo a los grupos criminales de diferentes maneras. En primer lugar, los saqueos fueron mucho más organizados cuando las pandillas atacaron a las cadenas de supermercados y usaron armas de fuego para combatir la Policía. En segundo lugar, los grupos del crimen organizado robaron alimentos y otros bienes de camiones detenidos en los accesos a la ciudad o de los vehículos de distribución de alimentos que se movilizaban por los corredores humanitarios. Estos incidentes fueron en gran parte liderados por fuerzas criminales, pero miles de personas oportunistas se aprovecharon de la situación. La mezcla de grupos criminales organizados y ciudadanos en los lugares de los hechos complicaron y dificultaron la respuesta eficaz por parte de la Policía.

La escasez de combustible brindó otra oportunidad delictiva cuando los grupos criminales tomaron el control de las estaciones de servicio, que estaban casi vacías, y comenzaron a vender gasolina directamente. Mediante el empleo de peligrosos métodos improvisados de bombeo, extrajeron combustible de los tanques para venderlo en el lugar o lo almacenaron para su posterior venta a través de vendedores informales, en un mercado de clientes desesperados que incluyó ambulancias y vehículos de primeros auxilios. Durante estos días, fue común ver camiones de comida y de combustible que se movilizaban escoltados por el ejército para evitar saqueos.

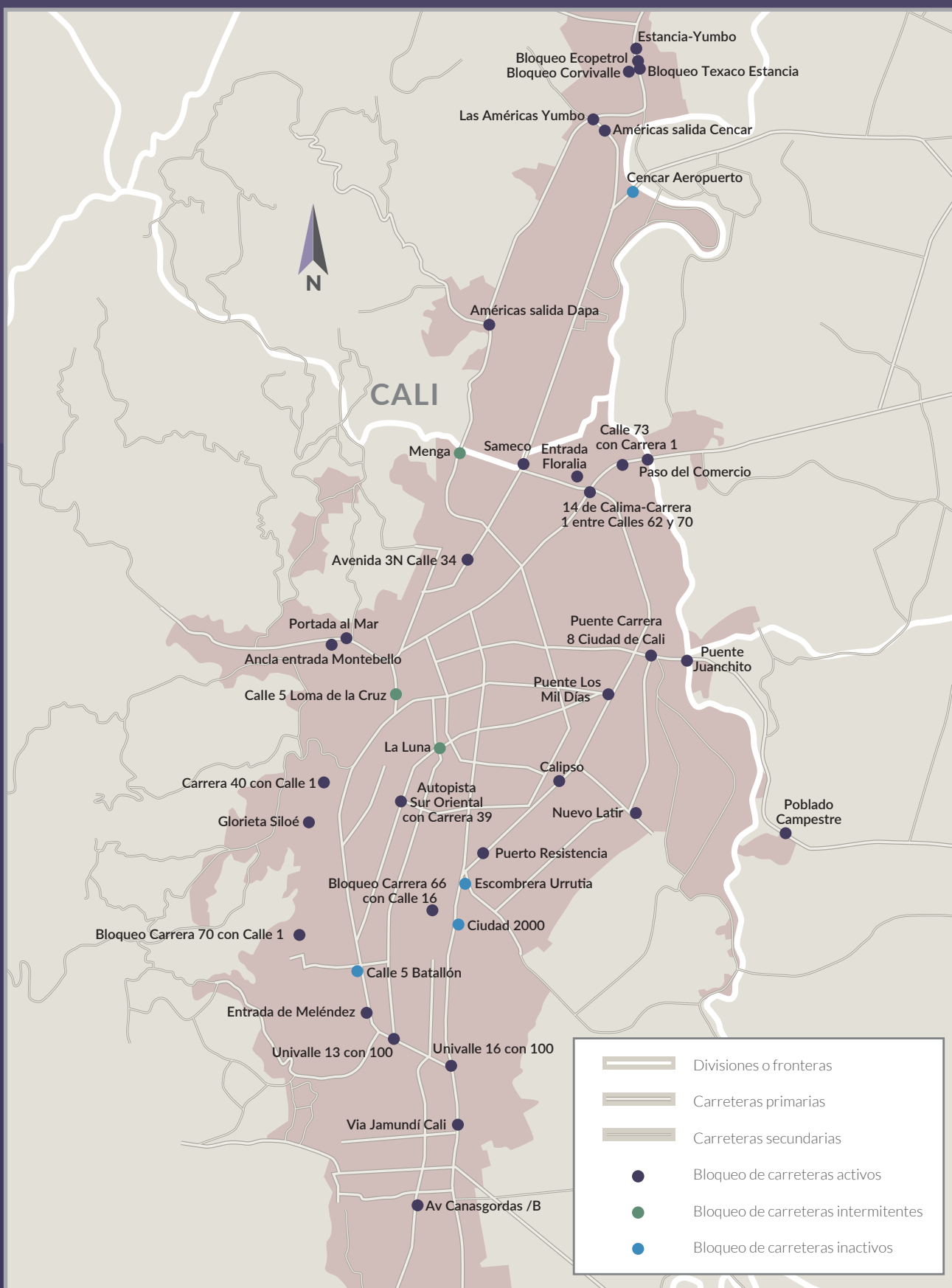


GRÁFICO 4 Bloqueos de carreteras en Cali, 6 de mayo del 2021.

FUENTE: Adaptado de <https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/paro-nacional-2021-%C2%BFel-estado-contra-la-sociedad->

*Los manifestantes
que habían
tomado las calles
no reconocieron
a estos actores
criminales como
representantes de
su movimiento.*

Finalmente, algunos grupos delictivos organizados atacaron las estaciones de Policía locales para liberar a los detenidos. En Siloé, una estación fue incendiada y más de 30 personas escaparon.¹⁷

Extorsión por delincuentes de bajo perfil

Así como los grupos del crimen organizado se aprovecharon de la situación, muchos delincuentes de bajo perfil también utilizaron el vacío de autoridad y la ausencia de la Policía para cometer delitos. Algunos erigieron puestos de control ilegales por toda la ciudad, haciéndolos pasar por pequeñas áreas de manifestación. En realidad, los puestos de control fueron diseñados para extorsionar a personas y vehículos, incluidos los servicios médicos, los recolectores de basura y el transporte público. Aquellos que no estaban dispuestos a pagar fueron amenazados con violencia. De manera similar, el robo de teléfonos celulares y bicicletas se ha vuelto común en Cali, sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades.

Dos semanas después del inicio del paro, la ciudad de Cali no tenía control sobre la criminalidad desatada y ni los agentes de la ley y el orden ni el gobierno local supieron responder a la situación. Como lo explicó un líder de una ONG: «Los grupos criminales sabían que la Policía no intervendría, por lo que planearon acciones más organizadas como robos y saqueos, y compitieron con otros grupos por el control de los territorios».¹⁸ La ausencia de investigaciones legales incrementó las dinámicas de homicidios, de desaparición de personas y de brutalidad policial, las cuales siguen sin ser esclarecidas. A pesar de que los conflictos disminuyeron durante las semanas tres y cuatro del paro, la incapacidad de las autoridades para brindar seguridad abrió la puerta para que los ciudadanos usaran las armas y se tomaran la justicia por mano propia.

El control criminal de los bloqueos

De cara a la futura estabilidad de Cali y de Colombia en general, las manifestaciones y los bloqueos pueden haber creado oportunidades para una mayor actividad criminal a largo plazo. Aunque estas oportunidades son hipotéticas en medio de una situación social, política y económica incierta, pueden explorarse y estudiarse después de que finalice el paro para prevenir futuros hechos de crimen y violencia.

Cooptación de un movimiento social

Según fuentes cercanas a los bloqueos y áreas de manifestación, con el paso del tiempo se produjo un cambio en las personas que constituían la Primera Línea. Un beneficiario del Fondo de Resiliencia de GI-TOC dijo que, con el tiempo, la mayoría de los jóvenes locales que inicialmente habían creado barricadas se habían retirado y sus lugares habían sido ocupados por otros actores relacionados con el crimen y la delincuencia.

Este cambio en la composición de la Primera Línea podría explicarse por el cansancio de los manifestantes iniciales tras la confrontación en las calles durante un mes. También podría ser el resultado de la presión que han recibido los jóvenes en la dinámica de los puntos de bloqueos. Externamente, se reportaron agresiones por parte de grupos civiles



Un bloqueo en una vía principal en Yumbo, al norte de Cali, 26 de mayo. © Fotografía facilitada a GI-TOC

armados, que aparecen en videos disparando contra las barricadas desde vehículos. Desde adentro, algunos de los voceros que participaron en los diálogos iniciales con el municipio se han quejado de la presencia de actores radicales que intentan estropear los encuentros. «Frente al sabotaje de los diálogos, hay actores tanto de izquierda como de derecha que se están beneficiando del aumento de muertes, desapariciones y violencia. Estamos haciendo campaña y tenemos que culparnos unos a otros», dijo un activista local.¹⁹

Otra fuente cercana a los bloqueos dijo que los jóvenes manifestantes sienten temor por sus vidas: «Hay personas que amenazan con matarnos a nosotros y a nuestras familias si salimos de las barricadas; hay gente que no quiere que terminen los bloqueos».²⁰ Estas declaraciones sugieren que al interior de los puntos de bloqueo pueden existir motivaciones criminales más amplias.

Aumento de la violencia, el robo y el comercio ilícito

Son muchos los actores criminales que se pudieron beneficiar del mantenimiento de los puntos de concentración y de los bloqueos a las vías. Uno de ellos son los «piratas», que suministran un método ilegal de transporte colectivo de personas y, presumiblemente, de transporte ilegal de drogas. El 28 de abril, todas las cámaras utilizadas por la Secretaría de Tránsito y Movilidad para multar a los conductores fueron objeto de vandalismo sistemático. Similarmente, desde el inicio del paro, casi el 70 % del sistema de buses municipal ha sufrido daños en su infraestructura. Estos daños a la infraestructura de transporte público han creado un espacio para que los «piratas» operen sin restricciones, incrementando sus ganancias, por lo menos mientras esta se reconstruye.

Puede que haya intereses criminales más amplios dentro del movimiento social.

Otro tipo de actor criminal que se pudo beneficiar de los bloqueos fueron las bandas criminales locales que operan en barrios marginales y vulnerables. «Por el momento no hay Policías en los barrios de Cali, ni capacidad judicial. Existe un enfrentamiento directo entre las bandas que están reforzando su oferta criminal. Esto ha generado un caos generalizado que abre la puerta a que el crimen reine en la ciudad», dijo un beneficiario del Fondo de Resiliencia de GI-TOC que trabaja en un programa de reducción de violencia en los barrios marginales de Cali.²¹ Cada día que persisten los bloqueos es un día en que la Policía no ingresa a los barrios, lo que permite que las pandillas locales fortalezcan y consoliden los mercados criminales y la gobernanza criminal. En el mes de mayo, hubo 177 homicidios, un 45 % más que en mayo de 2020.²² La mayoría de estos homicidios no estuvieron relacionados con la protesta, sino con enfrentamientos entre bandas criminales en los barrios de la ciudad. Como explicó el director de una ONG local:

La Policía tiene una relación muy difícil con la comunidad, pero al final la Policía es la única que puede detener un enfrentamiento armado. Los grupos criminales temían la presencia de la Policía. Ahora, la frecuencia, intensidad y duración de los enfrentamientos ha aumentado porque no llega la Policía. Hay continuos enfrentamientos y lo único que los detiene es cuando se agotan las municiones. Esto genera mucha ansiedad en las comunidades.²³

A nivel estructural, las bandas del crimen organizado regional que lideran la producción y distribución de drogas ilícitas se podrían beneficiar del caos sostenido y los bloqueos de vías en Cali y en el norte del departamento. En el suroeste del país se siembra y se produce cocaína, heroína y marihuana. Desde el inicio del paro, el Gobierno colombiano movilizó tropas del ejército, helicópteros y aviones que normalmente combaten la «guerra contra las drogas», para reforzar la seguridad en Cali. Cada día que las fuerzas armadas permanecieron desplegadas en la ciudad, fue más fácil el transporte de drogas ilegales desde las regiones de producción a los centros de distribución en la costa Pacífica para las bandas de crimen organizado del suroeste del país.

Fuga de capitales e inyección ilegal de efectivo

A raíz del daño económico causado por el paro, la actividad criminal podría extenderse potencialmente al sector financiero. El daño al sector manufacturero local, primero por el COVID-19 y luego por los bloqueos, podría conducir a una fuga de capitales dentro de la industria de la región. Tal vacío de capital crearía una demanda de nuevos inversores para reiniciar la economía con grandes inyecciones de capital. Teniendo en cuenta que Cali es la sede de muchos grupos del crimen organizado y una ciudad donde los flujos de efectivo legales e ilegales son motor de la economía, la potencial fuga de capitales podría crear una oportunidad de oro para el lavado de activos por parte de los grupos criminales.

A la luz de las diferentes aproximaciones criminales, es posible que el sostenimiento de los bloqueos en nombre del paro nacional fuera usado como parte de una estrategia de grupos criminales altamente organizados, que se beneficiaron de la ausencia de la fuerza pública en sus territorios.



LA HISTORIA SE REPITE

Después del paro nacional, el Gobierno colombiano y sus fuerzas armadas necesitan una mejor comprensión de la relación entre la movilización social y los intereses criminales para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente durante las jornadas de movilización. Hasta ahora, el enfoque del Gobierno ha sido responder a todas las manifestaciones de movilización social y manifestación política, como si fueran el resultado de grupos criminales y subversivos que requiere un despliegue rápido del uso de la fuerza. Esta aproximación sigue una doctrina militar histórica utilizada en Colombia para combatir el conflicto armado interno, que permite promover respuestas de tipo «mano dura». Los eventos de 2021 –una movilización masiva prolongada, el aumento de la violencia y el crimen, y el colapso económico– demuestran que este enfoque ha fracasado.

▲
Policías custodian el Congreso de Colombia ante manifestantes. © Lokman Ilhan/Anadolu Agency por medio de Getty Images

Recomendaciones

En medio de mucha incertidumbre, lo que los colombianos saben con certeza es que la historia estaba ocurriendo ante sus ojos. Sin embargo, la muerte y las desapariciones forzadas tras la movilización social son parte de una historia que Colombia no puede permitirse repetir. En el plazo inmediato, reducir los enfrentamientos y llegar a acuerdos sobre acciones humanitarias, como la búsqueda de personas desaparecidas, debe ser la prioridad de todos los involucrados. Más allá de las intervenciones humanitarias inmediatas, existen otras acciones estratégicas que deben ser incluidas en la agenda nacional, como la reforma policial, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y la implementación de políticas de respuesta a la crisis económica y social.

Con base en lo que se puede aprender del caso de Cali, se aplican las siguientes recomendaciones:

1. Buscar a los desaparecidos. Es necesario abordar tres aspectos: información, investigación y apoyo a las familias víctimas.
 - Aún se desconoce el número total de personas desaparecidas, ya que los datos de fuentes institucionales de la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo difieren de los recopilados por las plataformas de derechos humanos de la ciudad. Por lo tanto, es necesario crear un organismo temporal integrado por estos tres actores para compartir información, identificar duplicados, identificar a los fallecidos y acordar un universo de casos. Esta información debe centralizarse en la base de datos nacional de personas desaparecidas (SIRDEC) para facilitar su investigación, así como para garantizar el acceso a los datos.
 - A partir de la definición del universo de casos, la Fiscalía General debe crear un equipo élite para trabajar junto a las organizaciones de la sociedad civil en la investigación de los casos de desaparición en el marco del paro nacional. Actuar de inmediato es fundamental para salvar vidas. Cada día que pasa sin localizar a las personas desaparecidas disminuye las posibilidades de encontrarlas.
 - Mientras se consolida la información y se inicia la fase de investigación, se debe brindar apoyo psicosocial y de salud mental a los familiares de las personas desaparecidas. El acompañamiento de las familias les ayuda a evitar la revictimización y fomenta la resiliencia entre ellos. Las organizaciones de la sociedad civil del país llevan años brindando este tipo de apoyo comunitario. Por lo tanto, son los actores más preparados y confiables para implementar este servicio, que debe ser financiado por el gobierno y los donantes.
2. Reforma policial integral. La reforma policial ha sido un tema pendiente desde las conversaciones de paz con las FARC en 2016. A pesar de la desmovilización y reintegración de las FARC luego de que se alcanzó el acuerdo de paz, otros enemigos internos y amenazas subversivas persisten en Colombia. Esta fue la razón principal que adujeron las autoridades para no embarcarse en una reforma policial coherente. Sin embargo, los acontecimientos en torno al paro han confirmado que la reforma es una necesidad y una prioridad. El pensamiento y la planificación de la reforma deben centrarse en un proceso consultivo de codiseño con organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia en esta área. Tres aspectos clave podrían ayudar a la Policía a convertirse en un cuerpo civil, con una doctrina basada en los derechos humanos, en lugar de un enfoque militarista:
 - Sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y trasladarla al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana, siguiendo el ejemplo de Chile. Esto podría garantizar que la autoridad y el mando de los alcaldes y gobernadores sobre la Policía sea real y se centre en las necesidades de seguridad local, en lugar de responder a un mando centralizado que luchar contra los enemigos internos.
 - Modificar los procedimientos internos. Esto incluye la revisión y modificación de la Ley 1801 de 2016 (el «Código de Policía») para mejorar la eficiencia de la asignación de tareas y responsabilidades a la Policía. Del mismo modo,

los procedimientos internos relacionados con la vinculación de personal deben mejorarse con criterios de admisión más estrictos que permitan el ingreso de cadetes con antecedentes más sólidos. Actualmente, quienes ingresan al servicio de Policía son quienes no pudieron optar por otras opciones profesionales. Por último, los procedimientos relacionados con las investigaciones internas sobre mala conducta de la Policía, las violaciones de los derechos humanos y los abusos de autoridad deben ser dirigidos por un organismo independiente e imparcial.

- Mejorar la formación policial. La formación de los agentes de Policía debe centrarse en la preservación de los derechos humanos como núcleo de la función policial y en la comprensión de que la seguridad es un derecho en sí mismo. Para complementar esto, los oficiales deben recibir capacitación práctica en enfoques de resolución de conflictos para situaciones del día a día, así como capacitación en prácticas restaurativas para evitar una sobrecarga de casos en el sistema judicial.

3. El debate en torno a la protesta social. El debate en torno a la descriminalización de la movilización social es clave para definir los límites entre las expresiones cívicas y las actividades delictivas, con el fin de permitir que la Policía actúe legalmente en ambos escenarios y restablecer la confianza entre los ciudadanos. El proceso podría desarrollarse en tres pasos:

- Paso 1: A través del diálogo, los involucrados en enfrentamientos violentos durante el paro deben aceptar abiertamente las responsabilidades legales y sociales de sus acciones. Esto incluye que la Policía reconozca la mala conducta y las violaciones de derechos humanos de algunos de sus miembros, y los manifestantes reconozcan el impacto inmediato y a largo plazo de los bloqueos y de la destrucción de la infraestructura. Esto podría ayudar a mejorar la opinión pública tanto hacia la Policía como hacia los manifestantes. Se debe confiar en el sistema de justicia para que los responsables de violaciones legales rindan cuentas.
- Paso 2: Debe crearse una comisión para esclarecer los hechos ocurridos durante el paro nacional, incluyendo la brutalidad y mala conducta policial, así como las acciones delictivas que ocurrieron dentro del paro. Entender estos hechos y desarrollar una narrativa sobre la huelga desde diferentes voces y perspectivas permitirá a la sociedad comprender lo sucedido y facilitar la reconciliación.
- Paso 3: Una reconstrucción de los hechos del paro facilita una discusión sobre nuevas formas de abordar la movilización social. Este nuevo enfoque debería incluir procedimientos policiales que se centren en proteger las vidas de quienes manifiestan pacíficamente y aclarar los límites en torno a lo que se comprende como una manifestación pacífica. Los detalles del nuevo enfoque deberían ser el resultado de un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas.

4. Fortalecimiento de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La Fiscalía General y la Unidad Nacional de Policía que se encarga de la investigación judicial

deben fortalecerse en términos técnicos y financieros. Esto permitiría investigar las múltiples violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro nacional. También garantizará que las autoridades estén mejor preparadas para reaccionar y enjuiciar las actividades delictivas que tengan lugar en futuras manifestaciones.

- Investigación criminal: Más de 60 muertes, 3 000 heridos, 25 denuncias de violencia sexual y más de 100 denuncias de desapariciones requieren investigaciones criminales efectivas y eficientes. En un país donde la justicia no es reconocida por su eficacia, los crímenes que ocurrieron durante el paro nacional deben ser priorizados para llevar a los responsables rápidamente ante la justicia. Sin esta acción, cualquier futura protesta social será considerada una actividad delictiva, mientras que los actores criminales seguirán aprovechando los escenarios de movilización social.
- Inteligencia y preparación: los órganos de inteligencia deben estar mejor preparados para futuras convocatorias de paro nacional a fin de identificar dónde podrían ocurrir acciones delictivas. Entonces, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben reaccionar rápidamente contra los saqueos, el vandalismo y otras actividades delictivas que se han vuelto comunes durante las movilizaciones sociales masivas. Cuando estos órganos actúan de manera coordinada y coherente, se pueden evitar la violencia innecesaria y el enfrentamiento con manifestantes pacíficos.

5. Respuesta del Gobierno a los manifestantes. El Gobierno necesita escuchar activamente a los manifestantes, desarrollar políticas públicas adaptadas a las necesidades de los jóvenes que tomaron las calles y apoyar la recuperación del sector privado. Si el Gobierno no responde a las genuinas exigencias de la sociedad civil, el resultado será el triunfo de las economías ilegales y/o el escalamiento del caso de Cali al resto del país. Hay dos intervenciones de política pública de máxima prioridad:

- Oportunidades para la juventud: Es fundamental priorizar las oportunidades socioeconómicas para la juventud del país, ya que este segmento ha sido el más afectado por el COVID-19 y el principal impulsor del paro nacional. La salud mental, la tutoría, la educación, la inclusión laboral y el espíritu empresarial son las demandas más comunes de los jóvenes en las barricadas, todas las cuales serían intervenciones efectivas para disminuir la probabilidad de que se involucren en el futuro en la delincuencia y la violencia.
- Recuperación del sector privado: Los otros actores más afectados por el paro son las empresas formales en el suroccidente de Colombia. El paro de 2019, las cuarentenas y toques de queda por el COVID-19 y los bloqueos creados durante el paro nacional de 2021 han sofocado la actividad industrial. Sin un sector privado próspero, la economía de la región colapsará, arrojando a más personas a la pobreza, aumentando el descontento y creando más oportunidades para los actores criminales. Se necesitan exenciones fiscales temporales, créditos a bajo interés e inversiones públicas para mantener a flote la economía y evitar una crisis socioeconómica más profunda. Mantener el ecosistema económico formal puede ayudar a respaldar el mercado laboral que necesitan los jóvenes, al tiempo que reprime los esfuerzos delictivos y proporciona un medio de vida alternativo al beneficio ilegal.

REFERENCIAS

- 1 Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, Listado de las víctimas de violencia homicida en el marco del paro nacional, Indepaz, 28 de junio del 2021, <http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional>.
- 2 Cali, segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en el país, Alcaldía de Santiago de Cali, 21 de mayo del 2013, https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacion_afrodescendiente_en_el_pas/.
- 3 Banco Mundial, Cali, Colombia: *Toward a city development strategy*, 2002, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14086/multi0page.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 2002.
- 4 Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Santiago de Cali, Informe de seguridad y convivencia 2020, 4 de febrero del 2021, <https://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/159195/informe-seguridad-y-convivencia/>.
- 5 UNODC, Informe final del proceso de implementación de la metodología de auditorías de seguridad en Santiago de Cali – Documento técnico de soporte para la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Santiago de Cali, Bogotá, 2019
- 6 *El País Cali*, Cali perdió el 52% de negocios gastronómicos en un año de la pandemia, 25 de marzo del 2021, <https://www.elpais.com.co/cali/cali-perdio-el-52-de-negocios-gastronomicos-en-un-ano-de-la-pandemia.html>.
- 7 *El País Cali*, No se recupera mercado laboral en Cali: hay más de 279 mil desempleados, 31 de marzo del 2021, <https://www.elpais.com.co/cali/no-se-recupera-mercado-laboral-en-hay-mas-de-279-mil-desempleados.html>.
- 8 Departamento Nacional de Estadística, Encuesta integrada de hogares, 2021, <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos>, 2021.
- 9 *El País Cali*, 3,5 millones de personas cayeron a la pobreza en Colombia en el 20, 29 de abril del 2021, <https://www.elpais.com.co/economia/3-5-millones-de-personas-cayeron-a-la-pobreza-en-en-el-2020.html>.
- 10 *Cali 24 Horas*, El 24% de los hogares Caleños no están comiendo 3 veces al día, 27 de febrero del 2021, <https://www.cali24horas.com/el-24-de-los-hogares-calenos-no-estan-comiendo-3-veces-al-dia-dane>.
- 11 Fundación Corona and Red de Ciudades Cómo Vamos, Encuesta virtual mivozmiciudad ¿cómo van las cosas en su ciudad?, 11 de marzo del 2021, https://public.tableau.com/app/profile/camilo.delvasto/viz/DashboardEVCC_3_16154969758530/d_intro.
- 12 BBC, *Colombians take to the streets to oppose tax reform*, 29 de abril del 2021, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56928650>.
- 13 Indepaz, Listado de las 80 víctimas de violencia homicida en el marco del paro nacional al 23 de julio, <http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/>.
- 14 Entrevista con un activista local, Cali, junio del 2021.
- 15 El Espectador, "No les tengan miedo a los militares, teman de los vándalos": Ministro Diego Molano, 3 de mayo del 2021, <https://www.elespectador.com/judicial/no-les-tengan-miedo-a-los-militares-teman-de-los-vandalos-ministro-diego-molano-article>.
- 16 Entrevista con un activista local, Cali, junio del 2021.
- 17 Maria Mónica Gonzáles, Quemaron la estación de Policía de Siloé en Cali, RCN Radio, 4 de mayo del 2021, <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/quemaron-la-estacion-de-policia-de-siloe-en-cali>.
- 18 Entrevista con un beneficiario del Fondo de Resiliencia de GI-TOC en Cali, junio del 2021.
- 19 Entrevista con un activista local, Cali, June 2021.
- 20 Entrevista informal con un defensor de los derechos humanos.
- 21 Entrevista con un beneficiario del Fondo de Resiliencia de GI-TOC en Cali, junio del 2021.
- 22 Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Santiago de Cali, Boletín informe de seguridad y convivencia al 16 de junio, 16 de junio del 2021, <https://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/161297/informe-de-seguridad-convivencia-junio2021/>.
- 23 Entrevista con un beneficiario del Fondo de Resiliencia de GI-TOC, junio del 2021.



GLOBAL INITIATIVE

AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red global con más de 500 Expertos alrededor del mundo. The Global Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www.globalinitiative.net